

BANDO

A ALCALDESA-PRESIDENTA DO CONCELLO DE SALCEDA DE CASELAS FAI SABER

O Concello de Salceda de Caselas, ante a expansión que se está a vivir do novo coronavirus (Covid-19), e tralo decreto polo que se declara o estado de alarma, ven de adoptar as seguintes medidas para o Concello de Salceda de Caselas:

- Suspensión de tódalas actividades culturais, deportivas, festivas, formativas, etc., así como do mercado semanal dos mércores.
- Suspensión da atención ao público presencial en tódolos edificios municipais, agás no departamento da Policía Local. Mantense a atención telefónica ou a través da sede electrónica.
- Instauración do teletraballo no cadro de persoal do Concello naqueles casos en que sexa posible, así como salvagarda do persoal en situación de risco.
- Precintado dos parques infantís do casco urbano e das diferentes parroquias.
- Eliminación da denominada “zona azul” para aparcamento durante o estado de alarma.
- Recomendación ao tecido industrial e comercial de Salceda que teñan permitida a apertura de que apliquen medidas de responsabilidade e contención social.
- Recomendación á poboación de que se deben extremar as medidas de hixiene, con lavados frecuentes de mans con auga e xabón.
- Lémbrese a toda a veciñanza que o decreto polo que se declara o estado de alarma supón a interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o decreto ou as súas posibles prórrogas.

Estas medidas manteranse mentres as administracións autonómica e estatal non comuniquen o cambio de situación. Lémbrese que a responsabilidade individual é a mellor arma para combatir o coronavirus.

A vosa alcaldesa, xunto coa corporación municipal e o cadro de persoal do Concello, traballamos coordinadamente co persoal sanitario do centro de saúde para ofrecer o mellor servizo para a veciñanza. Sumando os esforzos de todos e todas sairemos adiante.

CONTACTOS:

Casa do Concello: 986349003 alcaldia@salcedadecaselas.gal

Servizos sociais: 986343368 servizossociais@salcedadecaselas.gal

Casa da Cultura Castela: 986340543 / 628579097 biblioteca@salcedadecaselas.gal

OMIX/OMIC: 986340543 / 628579097 omix@salcedadecaselas.gal

CDL O Torrón: 986347864 tle@salcedadecaselas.gal

Deportes: 986349513 / 680400978 deportes@salcedadecaselas.gal

Policía Local: 639821377 policia@salcedadecaselas.gal

Logopeda: 986340862 logopeda@salcedadecaselas.gal

Servizo de atención temperá: 680400979 atenciontemprana.salceda@aceesca.com

Xulgado: 986349466

DOCUMENTO ASINADO ELECTRONICAMENTE



I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

3692 *Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.*

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 a pandemia internacional. La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. Las circunstancias extraordinarias que concurren constituyen, sin duda, una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud tanto por el muy elevado número de ciudadanos afectados como por el extraordinario riesgo para sus derechos.

El artículo cuarto, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, habilita al Gobierno para, en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la normalidad.

En este marco, las medidas previstas en la presente norma se encuadran en la acción decidida del Gobierno para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos, contener la progresión de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública. Las medidas temporales de carácter extraordinario que ya se han adoptado por todos los niveles de gobierno deben ahora intensificarse sin demora para prevenir y contener el virus y mitigar el impacto sanitario, social y económico.

Para hacer frente a esta situación, grave y excepcional, es indispensable proceder a la declaración del estado de alarma.

Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a la situación, resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, del Ministro de Sanidad, de la Ministra de Defensa, y de los Ministros del Interior, y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de marzo de 2020,

DISPONGO:

Artículo 1. *Declaración del estado de alarma.*

Al amparo de lo dispuesto en el artículo cuarto, apartados b) y d), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, se declara el estado de alarma con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

Artículo 2. *Ámbito territorial.*

La declaración de estado de alarma afecta a todo el territorio nacional.

Artículo 3. *Duración.*

La duración del estado de alarma que se declara por el presente real decreto es de quince días naturales.

Artículo 4. *Autoridad competente.*

1. A los efectos del estado de alarma, la autoridad competente será el Gobierno.
2. Para el ejercicio de las funciones a que se hace referencia en este real decreto, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, serán autoridades competentes delegadas, en sus respectivas áreas de responsabilidad:

- a) La Ministra de Defensa.
- b) El Ministro del Interior.
- c) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
- d) El Ministro de Sanidad.

Asimismo, en las áreas de responsabilidad que no recaigan en la competencia de alguno de los Ministros indicados en los párrafos a), b) o c), será autoridad competente delegada el Ministro de Sanidad.

3. Los Ministros designados como autoridades competentes delegadas en este real decreto quedan habilitados para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y deberán prestar atención a las personas vulnerables. Para ello, no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.

4. Durante la vigencia del estado de alarma queda activado el Comité de Situación previsto en la disposición adicional primera de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, como órgano de apoyo al Gobierno en su condición de autoridad competente.

Artículo 5. *Colaboración con las autoridades competentes delegadas.*

1. Los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales quedarán bajo las órdenes directas del Ministro del Interior, a los efectos de este real decreto, en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto, salvo las expresamente exceptuadas. Para ello, podrán dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo.

A tal fin, la ciudadanía tiene el deber de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.

3. En aquellas comunidades autónomas que cuenten con cuerpos policiales propios, las Comisiones de Seguimiento y Coordinación previstas en las respectivas Juntas de Seguridad establecerán los mecanismos necesarios para asegurar lo señalado en los dos apartados anteriores.

4. Los servicios de intervención y asistencia en emergencias de protección civil definidos en el artículo 17 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, actuarán bajo la dependencia funcional del Ministro del Interior.

5. El Ministro del Interior podrá dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones que considere necesarias a todos los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

6. Para el eficaz cumplimiento de las medidas incluidas en el presente real decreto, las autoridades competentes delegadas podrán requerir la actuación de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

Artículo 6. *Gestión ordinaria de los servicios.*

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.

Artículo 7. *Limitación de la libertad de circulación de las personas.*

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

- a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
- b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
- c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
- d) Retorno al lugar de residencia habitual.
- e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
- f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
- g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
- h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.

3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.

4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos.

Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.

Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.

Artículo 8. *Requisas temporales y prestaciones personales obligatorias.*

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los

operadores críticos y esenciales. Cuando la requisita se acuerde de oficio, se informará previamente a la Administración autonómica o local correspondiente.

2. En los mismos términos podrá imponerse la realización de prestaciones personales obligatorias imprescindibles para la consecución de los fines de este real decreto.

Artículo 9. *Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación.*

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados.

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible.

Artículo 10. *Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.*

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio indicados en el anexo del presente real decreto.

4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

Artículo 11. *Medidas de contención en relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas.*

La asistencia a los lugares de culto y a las ceremonias civiles y religiosas, incluidas las fúnebres, se condicionan a la adopción de medidas organizativas consistentes en evitar aglomeraciones de personas, en función de las dimensiones y características de los lugares, de tal manera que se garantice a los asistentes la posibilidad de respetar la distancia entre ellos de, al menos, un metro.

Artículo 12. *Medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.*

1. Todas las autoridades civiles sanitarias de las administraciones públicas del territorio nacional, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas, quedarán bajo las órdenes directas del Ministro de Sanidad en cuanto sea

necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza.

2. Sin perjuicio de lo anterior, las administraciones públicas autonómicas y locales mantendrán la gestión, dentro de su ámbito de competencia, de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento. El Ministro de Sanidad se reserva el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio.

3. En especial, se asegurará la plena disposición de las autoridades civiles responsables del ámbito de salud pública, y de los empleados que presten servicio en el mismo.

4. Estas medidas también garantizarán la posibilidad de determinar la mejor distribución en el territorio de todos los medios técnicos y personales, de acuerdo con las necesidades que se pongan de manifiesto en la gestión de esta crisis sanitaria.

5. Las autoridades competentes delegadas ejercerán sus facultades a fin de asegurar que el personal y los centros y establecimiento sanitarios de carácter militar contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio nacional.

6. Asimismo, el Ministro de Sanidad podrá ejercer aquellas facultades que resulten necesarias a estos efectos respecto de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada.

Artículo 13. *Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública.*

El Ministro de Sanidad podrá:

a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública.

b) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico.

c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.

Artículo 14. *Medidas en materia de transportes.*

1. En relación con todos los medios de transporte, cualquiera que sea la Administración competente sobre los mismos, se aplicará lo siguiente:

a) El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda habilitado para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para establecer condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares.

b) Los actos, disposiciones y medidas a que se refiere el párrafo a) anterior podrán adoptarse de oficio o a solicitud motivada de las autoridades autonómicas y locales competentes, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso. Para ello no será precisa la tramitación de procedimiento administrativo alguno.

2. Asimismo, se adoptan las siguientes medidas aplicables al transporte interior:

a) En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo que no están sometidos a contrato público u obligaciones de servicio público (OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de operaciones en, al menos, un 50 %. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrá modificar este porcentaje y establecer condiciones específicas al respecto.

b) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y marítimo de competencia estatal que están sometidos a contrato público u OSP reducirán su oferta total de operaciones en, al menos, los siguientes porcentajes:

- i. Servicios ferroviarios de media distancia: 50 %.
- ii. Servicios ferroviarios media distancia-AVANT: 50 %.
- iii. Servicios regulares de transporte de viajeros por carretera: 50 %.
- iv. Servicios de transporte aéreo sometidos a OSP: 50 %.
- v. Servicios de transporte marítimo sometidos a contrato de navegación: 50 %.

Los servicios ferroviarios de cercanías mantendrán su oferta de servicios.

Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán modificar los porcentajes de reducción de los servicios referidos anteriormente y establecer condiciones específicas al respecto. En esta resolución se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.

c) Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta de transporte.

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y las autoridades autonómicas y locales con competencias en materia de transportes podrán establecer un porcentaje de reducción de servicios en caso de que la situación sanitaria así lo aconseje, así como otras condiciones específicas de prestación de los mismos.

Al adoptar estas medidas se tendrá en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario.

d) Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos a), b) y c) se establecerán unos criterios específicos para el transporte entre la Península y los territorios no peninsulares, así como para el transporte entre islas.

e) En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el Ministerio de Sanidad.

f) Los sistemas de venta de billetes online deberán incluir durante el proceso de venta de los billetes un mensaje suficientemente visible en el que se desaconseje viajar salvo por razones inaplazables. Por orden del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se podrán establecer las características y contenido de este anuncio.

g) En aquellos servicios en los que el billete otorga una plaza sentada o camarote, los operadores de transporte tomarán las medidas necesarias para procurar la máxima separación posible entre los pasajeros.

3. Los operadores de transporte llevarán a cabo los ajustes necesarios para cumplir con los porcentajes establecidos en este artículo de la forma lo más homogéneamente posible entre los distintos servicios que prestan y podrán plantear al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana cuantas cuestiones requieran interpretación o aclaración.

Si por razones técnicas u operativas no resulta viable la aplicación directa de los porcentajes establecidos desde el primer día, se deberá llevar a cabo el ajuste más rápido posible de los servicios, que no podrá durar más de cinco días.

4. Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.

5. Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar todas aquellas medidas adicionales necesarias para limitar la circulación de medios de transporte colectivos que resulten necesarias y proporcionadas para preservar la salud pública.

Artículo 15. *Medidas para garantizar el abastecimiento alimentario.*

1. Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar:

a) El abastecimiento alimentario en los lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino. En particular, cuando resultara necesario por razones de seguridad, se podrá acordar el acompañamiento de los vehículos que realicen el transporte de los bienes mencionados.

b) Cuando sea preciso, el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, lonjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.

2. Asimismo, las autoridades competentes podrán acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas con el fin de asegurar el buen funcionamiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 16. *Tránsito aduanero.*

Las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el tránsito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o aeropuertos. A este respecto se atenderá de manera prioritaria los productos que sean de primera necesidad.

Artículo 17. *Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural.*

Las autoridades competentes delegadas podrán adoptar las medidas necesarias para garantizar el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en los artículos 49 y 101 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

Artículo 18. *Operadores críticos de servicios esenciales.*

1. Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de infraestructuras críticas, adoptarán las medidas necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que les son propios.

2. Dicha exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los propios servicios esenciales.

Artículo 19. *Medios de comunicación de titularidad pública y privada.*

Los medios de comunicación social de titularidad pública y privada quedan obligados a la inserción de mensajes, anuncios y comunicaciones que las autoridades competentes delegadas, así como las administraciones autonómicas y locales, consideren necesario emitir.

Artículo 20. *Régimen sancionador.*

El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el artículo diez de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición adicional primera. *Personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas.*

Queda exceptuado de las limitaciones a la libertad de circulación el personal extranjero acreditado como miembro de las misiones diplomáticas, oficinas consulares y organismos internacionales sitos en España, tanto para desplazamientos dentro del territorio nacional, como a su país de origen o a terceros Estados, en los que se encuentre igualmente acreditado, siempre que se trate de desplazamientos vinculados al desempeño de funciones oficiales.

Disposición adicional segunda. *Suspensión de plazos procesales.*

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de *habeas corpus*, a las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

Disposición adicional tercera. *Suspensión de plazos administrativos.*

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.

4. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma.

Disposición adicional cuarta. *Suspensión de plazos de prescripción y caducidad.*

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Disposición adicional quinta. *Carácter de agente de la autoridad de los miembros de las Fuerzas Armadas.*

De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, en relación con los artículos 15.3 y 16 e) de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, los miembros de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de las funciones previstas en este real decreto tendrán carácter de agentes de la autoridad.

Disposición final primera. *Ratificación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes de las Administraciones Públicas.*

1. Quedan ratificadas todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con este real decreto.

2. La ratificación contemplada en esta disposición se entiende sin perjuicio de la ratificación judicial prevista en el artículo 8.6.2.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Disposición final segunda. *Habilitación.*

Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto el Gobierno podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas establecidas en este, de los cuales habrá de dar cuenta al Congreso de los Diputados de acuerdo con lo previsto en el artículo octavo.dos de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Disposición final tercera. *Entrada en vigor.*

El presente real decreto entrará en vigor en el momento de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 14 de marzo de 2020.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO

ANEXO

Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3

Museos.

Archivos.

Bibliotecas.

Monumentos.

Espectáculos públicos.

Esparcimiento y diversión:

Café-espectáculo.

Circos.

Locales de exhibiciones.

Salas de fiestas.

Restaurante-espectáculo.

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.

Culturales y artísticos:

Auditorios.

Cines.

Plazas, recintos e instalaciones taurinas.

Otros recintos e instalaciones:

Pabellones de Congresos.

Salas de conciertos.

Salas de conferencias.

Salas de exposiciones.

Salas multiuso.

Teatros.

Deportivos:

Locales o recintos cerrados.

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.

Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.

Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.

Galerías de tiro.

Pistas de tenis y asimilables.

Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.

Piscinas.

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.

Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.

Velódromos.

Hipódromos, canódromos y asimilables.

Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.

Polideportivos.

Boleras y asimilables.

Salones de billar y asimilables.

Gimnasios.

Pistas de atletismo.

Estadios.

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas:

Recorridos de carreras pedestres.
Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables.
Pruebas y exhibiciones náuticas.
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas:

De baile:

Discotecas y salas de baile.
Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades.

Juegos y apuestas:

Casinos.
Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
Salones de juego.
Salones recreativos.
Rifas y tómbolas.
Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:

Parques de atracciones, ferias y asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.

Recintos abiertos y vías públicas:

Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

Bares especiales:

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
Bares de copas con actuaciones musicales en directo.

De hostelería y restauración:

Tabernas y bodegas.
Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables.
Bares-restaurante.
Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
Salones de banquetes.
Terrazas.

I. DISPOSICIÓN XERAIS**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA**

RESOLUCIÓN do 13 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 13 de marzo de 2020, polo que se declara a situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia e se activa o Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) no seu nivel IG (emerxencia de interese galego), como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do trece de marzo de dous mil vinte, adoptou o seguinte acordo:

«ACORDO POLO QUE SE DECLARA A SITUACIÓN DE EMERXENCIA SANITARIA NO TERRITORIO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E SE ACTIVA O PLAN TERRITORIAL DE EMERXENCIAS DE GALICIA (PLATERGA) NO SEU NIVEL IG (EMERXENCIA DE INTERESE GALEGO), COMO CONSECUENCIA DA EVOLUCIÓN DA EPIDEMIA DO CORONAVIRUS COVID-19

O Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do doce de marzo de dous mil vinte, aprobou o Acordo mediante o que se adoptaron as medidas preventivas en materia de saúde pública na Comunidade Autónoma de Galicia, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

Os coronavirus son unha ampla familia de virus que, normalmente, adoitan afectar só os animais, aínda que algúns teñen a capacidade de transmitirse dos animais ás persoas, provocando cadros clínicos que van desde o arrefriado común ata enfermidades máis graves, como acontece co coronavirus que causou a síndrome respiratoria aguda grave (SARS-CoV) e o coronavirus causante da síndrome respiratoria de Oriente Medio (MERS-CoV).

A aparición do coronavirus COVID-19 no mes de decembro de 2019 creou un escenario mundial que require a adopción de medidas preventivas e de accións que permitan facer un seguimento da situación do avance dos casos, o que implica para as autoridades a previsión de escenarios e o deseño de protocolos que permitan prever e afrontar os múltiples escenarios que se poidan dar, coa maior eficacia posible.



O Regulamento sanitario internacional (RSI 2005) establece a figura da emerxencia de saúde pública de importancia internacional (ESPII) ante eventos extraordinarios que se determine que constitúen un risco para a saúde pública doutros Estados, por mor da propagación internacional dunha enfermidade, e que poderían exixir unha resposta internacional coordinada.

O xoves día 30 de xaneiro tivo lugar a segunda reunión do Comité de Emerxencias do RSI en relación co abrocho polo novo coronavirus COVID-19 na República Popular da China. Como resultado das deliberacións, o director xeral da OMS declarou que o dito abrocho constitúe unha ESPII.

Neste sentido, todas as actividades propostas pola OMS e polo Comité de Emerxencias neste momento están en marcha en todo o Estado, en coordinación coas comunidades autónomas.

Na Comunidade Autónoma de Galicia constituíuse unha Comisión interdepartamental para o seguimento do coronavirus COVID-19 e outras enfermidades emerxentes, que ten atribuídas as funcións de coordinación, seguimento e avaliación das actuacións adoptadas, tanto preventivas como paliativas, en función da situación epidemiolóxica concreta en Galicia e no Estado, a proposta de sistemas de vixilancia, a aprobación dos niveis de decisión e de responsabilidade das actuacións para preparar a resposta e de coordinación coa Administración xeral do Estado, así como a aprobación dos plans e protocolos de preparación e resposta e a coordinación da información.

A Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, de medidas especiais en materia de saúde pública, establece no seu artigo 1 que, co obxecto de protexer a saúde pública e prever a súa perda ou deterioración, as autoridades sanitarias das distintas administracións públicas poderán, dentro do ámbito das súas competencias, adoptar as medidas previstas na mesma lei cando así o exixan razóns sanitarias de urxencia ou necesidade.

Segundo o artigo 2 da mesma Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril, as medidas inclúen o recoñecemento, tratamento, hospitalización ou control cando se aprecien indicios racionais que permitan supoñer a existencia de perigo para a saúde da poboación por mor da situación sanitaria concreta dunha persoa ou grupo de persoas ou polas condicións sanitarias en que se desenvolva unha actividade.

O artigo 3 da mesma lei orgánica prevé tamén que, co fin de controlar as enfermidades transmisibles, a autoridade sanitaria, ademais de realizar as accións preventivas xerais,



poderá adoptar as medidas oportunas para o control dos enfermos, das persoas que estean ou estivesen en contacto con eles e do ambiente inmediato, así como as que se consideren necesarias en caso de risco de carácter transmisible.

Por outra banda, o artigo 24 da Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de sanidade, prevé que as actividades públicas e privadas que, directa ou indirectamente, poidan ter consecuencias negativas para a saúde serán sometidas polos órganos competentes ás limitacións preventivas de carácter administrativo, de acordo coa normativa básica do Estado.

O artigo 26 da mesma Lei 14/1986, do 25 de abril, prevé a posibilidade de que as autoridades sanitarias poidan adoptar as medidas preventivas pertinentes cando exista ou se sospeite razoablemente a existencia dun risco inminente e extraordinario para a saúde. A duración das ditas medidas fixarase para cada caso, sen prexuízo das prórrogas sucesivas acordadas por resolucións motivadas, e non excederá o que exixa a situación de risco inminente e extraordinario que as xustificou.

Pola súa banda, os artigos 27.2 e 54 da Lei 33/2011, do 4 de outubro, xeral de saúde pública, prevé, así mesmo, a adopción de medidas por parte das autoridades sanitarias en situación de risco para a saúde das persoas.

Na mesma liña, o artigo 34 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia, inclúe, entre as intervencións públicas que poderán exercer as autoridades sanitarias competentes sobre as actividades públicas e privadas que, directa ou indirectamente, poidan ter consecuencias para a saúde, adoptar as medidas preventivas que se consideren pertinentes en caso de que exista ou se sospeite razoablemente a existencia dun risco inminente e extraordinario para a saúde.

Tamén o artigo 38 da mesma lei prevé que as autoridades sanitarias poderán levar a cabo intervencións públicas nos supostos de riscos para a saúde de terceiras persoas, nos mesmos termos previstos nos artigos 2 e 3 da Lei orgánica 3/1986, do 14 de abril.

O artigo 33 da Lei 8/2008, do 10 de xullo, atribúe a condición de autoridade sanitaria ao Consello da Xunta de Galicia.

A situación e evolución do COVID-19, con case 120.000 casos e 114 países afectados en 11 de marzo, provocou que a OMS definise a epidemia como pandemia global.



Sobre esta base e tendo en conta que diversos estudos indican que, de non poñer en marcha medidas extraordinarias de distanciamento social, ata un 60% da poboación no peor escenario podería infectarse -o que provocaría unha onda epidémica sensiblemente elevada, que ademais, polos datos publicados na literatura científica, incidiría de maneira especial na poboación maior de 70 anos, que constitúe un 19% da poboación galega, onde a taxa de mortalidade podería superar o 2% entre os afectados-, pódese afirmar que a situación actual supón un risco inminente e extraordinario para a saúde da poboación.

Por outra banda, a Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, establece no seu artigo 36.1 que, cando a situación de perigo ou os danos ocorridos sexan, pola súa especial extensión ou intensidade, particularmente graves, o Consello da Xunta, por solicitude da persoa titular da consellería competente en materia de protección civil, poderá acordar a declaración de emerxencia de interese galego.

Segundo o artigo 8 da citada lei, en canto sexa activado un plan de protección civil ou nas situacións de risco ou emerxencia declarada, a autoridade de protección civil competente poderá ordenar á cidadanía a prestación de servizos persoais, de acción ou omisión, sempre de forma proporcionada á situación de necesidade e á capacidade de cada individuo. Así mesmo, sempre que a emerxencia o faga necesario e tendo en todo momento presente o principio de proporcionalidade, a autoridade de protección civil poderá ordenar a intervención e a ocupación temporal e transitoria dos bens dos/das cidadáns/ás.

O Plan territorial de emerxencias de Galicia (Platerga) determina que se activará o nivel IG “emerxencia de interese galego”, segundo a Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia, cando se produza unha emerxencia declarada como de interese galego polo Consello da Xunta.

Ante a evolución da situación en Galicia que motivou a declaración polo Consello da Xunta/Consellería de Sanidade da emerxencia sanitaria a causa do COVID-19, que pode exixir a necesidade de adoptar medidas disruptivas tales como a restrición de movementos ou o confinamento, garantindo o correcto equilibrio no exercicio de dereitos e obrigas da cidadanía galega, así como coordinar as actuacións necesarias de todos os organismos e a mobilización de medios e recursos dispoñibles na Comunidade Autónoma baixo a unidade de acción, mediante o establecemento dun mando único, por proposta do conselleiro competente en materia de protección civil e de acordo co disposto nos artigos 11.2.e) e 36 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de Galicia.



E, en consecuencia, de conformidade coas previsións normativas antes indicadas, e vista a solicitude de declaración de emerxencia sanitaria de interese galego formulada pola Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, por proposta da persoa titular da Consellería de Sanidade,

ACÓRDASE:

Primeiro. Declarar a situación de emerxencia sanitaria de interese galego, por solicitude da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Esta declaración poderá implicar a reorganización funcional dos servizos administrativos e as modificacións orzamentarias precisas para afrontar a emerxencia.

Segundo. Activar o Plan territorial de emerxencias de Galicia coa conseguinte asunción de todas as actividades de emerxencia polo titular da presidencia da Xunta de Galicia ou persoa en que delegue.

O director do Plan acordará a participación de todos aqueles operativos que se consideren necesarios.

A activación do Plan implicará, en todo caso:

a) A constitución do Centro de Coordinación Operativa do Plan e, se é o caso, do Centro de Control Operativo Integrado.

b) O enlace co posto de mando avanzado.

c) A mobilización inmediata dos diversos grupos operativos.

d) A información á poboación e a comunicación das instrucións pertinentes.

Terceiro. Constituír, co obxecto de garantir o funcionamento e a operatividade do Plan, un Centro de Coordinación Operativa (Cecop) presidido polo director do Plan ou persoa en quen delegue do que forman parte, ao menos, os seguintes membros:

Vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Delegación do Goberno



Conselleiro de Sanidade

Consellería de Política Social: secretaria xeral técnica de Política Social

Consellería de Cultura e Turismo: secretario xeral técnico de Cultura e Turismo

Consellería de Economía, Emprego e Industria: Secretaría Xeral de Emprego

Consellería de Medio Ambiente: presidente de Sogama

Director xeral de Emerxencias e Interior

Xerente da Axega

Asesoría Xurídica Xeral

Director xeral de Saúde Pública

Xerente do Sergas

Director do 061

Secretaría xeral de Medios

Dirección do Gabinete do Presidente

Presidente da Fegamp ou persoa en quen delegue

Establécese a creación dunha Sala de Coordinación Operativa (Sacop) no CIAE112, en que estarán:

1. Sergas 061
2. Axega 112
3. Garda Civil
4. Policía Nacional
5. UPA



Para os efectos de centralizar, coordinar, preparar e difundir entre a poboación toda a información sobre a evolución da situación establécese un gabinete de información dependente directamente da Dirección do Plan, que formará parte do Cecop.

Cuarto. Para o desenvolvemento do Plan poderán ditarse ordes e instrucións que afecten dereitos da cidadanía nos termos establecidos polas leis, así como adoptar medidas de obrigado cumprimento para os seus destinatarios e destinatarias, conforme o que dispoña se así o aconsellan as necesidades da emerxencia e dos bens que hai que protexer.

En particular, habilitase o Cecop para revisar ou adaptar ás circunstancias as previsións establecidas neste acordo.

O Plan territorial de protección civil de Galicia (Platerga) considera como medidas de protección as accións encamiñadas a impedir ou diminuír os danos a persoas e bens, materiais, naturais ou culturais, que se poidan producir, ou que se producen, en calquera tipo de emerxencia.

E, entre as medidas de protección referidas á poboación, establece as seguintes:

- Avisos á poboación afectada
- Confinamento en lugares seguros
- Evacuación e asistencia social
- Seguridade cidadá
- Control de accesos

Quinto. A desactivación do Plan será declarada formalmente polo seu director, unha vez superada totalmente a situación de emerxencia, comunicando esta situación á Axencia Galega de Emerxencias a través do Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia.

Sexto. A declaración de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia entenderase sen prexuízo das competencias estatais e das medidas que o Goberno ou a Administración do Estado aprobe no marco das súas competencias e en coordinación con elas.



No caso de que sexa precisa a adaptación das medidas previstas neste acordo ás actuacións que poida aprobar o Goberno ou a Administración do Estado, habilítase para iso o vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Sétimo. Como medida adicional ás previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia do 12 de marzo de 2020 e, tendo en conta a evolución da situación, dispónse a suspensión da actividade durante 14 días naturais, contados desde a publicación deste acordo no Diario Oficial de Galicia, de todos os establecementos de espectáculos públicos e actividades recreativas incluídos no anexo do Decreto 124/2019, do 5 de setembro, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos e actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación na materia e, nomeadamente:

- Cines
- Teatros
- Auditorios
- Circos
- Establecementos de espectáculos deportivos
- Recintos feirais
- Casinos
- Salas de bingo
- Salóns de xogo
- Tendas de apostas
- Estadios deportivos
- Pavillóns deportivos
- Recintos deportivos



- Pistas de patinaxe
- Ximnasios
- Piscinas de competición
- Piscinas recreativas de uso colectivo
- Parques acuáticos
- Salóns recreativos
- Parques multiocio
- Museos
- Bibliotecas
- Salas de conferencias
- Salas polivalentes
- Salas de concertos
- Restaurantes
- Salóns de banquetes
- Cafetarías
- Bares
- Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas
- Salas de festas
- Discotecas



- Pubs
- Cafés-espectáculo
- Furanchos
- Centros de ocio infantil

Oitavo. Os establecementos de restauración, como cafetarías, bares e restaurantes, permanecerán cerrados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio.

A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitanse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Noveno. O peche non afecta os bares e restaurantes localizados en establecementos hoteleiros ou no interior das instalacións destinadas á prestación de servizos públicos, sempre que a súa actividade se limite estritamente aos seus clientes aloxados ou aos traballadores das instalacións.

Décimo. Suspéndese, polo mesmo prazo establecido anteriormente, a actividade comercial retalista en todo o territorio da Comunidade Autónoma, a excepción dos establecementos comerciais retailistas de alimentación e produtos e bens de primeira necesidade recollidos a continuación segundo a Clasificación nacional de actividades económicas 2009 (CNAE-2009):

47 Comercio ao retallo, agás de vehículos de motor e motocicletas

47.1 Comercio ao retallo en establecementos non especializados.

47.11 Comercio ao retallo en establecementos non especializados, con predominio en produtos alimenticios, bebidas e tabaco.

47.2 Comercio ao retallo de produtos alimenticios, bebidas e tabaco en establecementos especializados.

47.21 Comercio ao retallo de froitas e hortalizas en establecementos especializados.



47.22 Comercio ao retallo de carne e produtos cárnicos en establecementos especializados.

47.23 Comercio ao retallo de peixe e mariscos en establecementos especializados.

47.24 Comercio ao retallo de pan e produtos de panadaría, confeitaría e pastelería en establecementos especializados.

47.25 Comercio ao retallo de bebidas en establecementos especializados.

47.26 Comercio ao retallo de produtos de tabaco en establecementos especializados.

47.29 Outro comercio ao retallo de produtos alimenticios en establecementos especializados.

47.3 Comercio ao retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados.

47.30 Comercio ao retallo de combustible para a automoción en establecementos especializados.

47.4 Comercio ao retallo de equipamentos para as tecnoloxías da información e as comunicacións en establecementos especializados.

47.41 Comercio ao retallo de ordenadores, equipamentos periféricos e programas informáticos en establecementos especializados

47.42 Comercio ao retallo de equipamentos de telecomunicacións en establecementos especializados

47.43 Comercio ao retallo de equipamentos de audio e vídeo en establecementos especializados

47.6 Comercio ao retallo de artigos culturais e recreativos en establecementos especializados.

47.62 Comercio ao retallo de xornais e artigos de papelería en establecementos especializados



47.7 Comercio ao retallo doutros artigos en establecementos especializados.

47.73 Comercio ao retallo de produtos farmacéuticos en establecementos especializados

47.74 Comercio ao retallo de artigos médicos e ortopédicos en establecementos especializados.

47.75 Comercio ao retallo de produtos cosméticos e hixiénicos en establecementos especializados.

47.76 Comercio ao retallo de flores, plantas, sementes, fertilizantes, animais de compañía e alimentos para estes en establecementos especializados.

47.9 Comercio ao retallo non realizado nin en establecementos, nin en postos de venda nin en mercados.

47.91 Comercio ao retallo por correspondencia ou internet.

No caso de equipamentos comerciais colectivos, tales como mercados municipais, centros, parques e/ou galerías comerciais, suspenderase a actividade comercial daqueles establecementos integrados nestes e non incluídos na lista anterior.

A permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida deberá ser a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade, quedando suspendida a posibilidade de consumo de produtos nos propios establecementos. En todo caso, evítanse aglomeracións e controlárase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Décimo primeiro. Así mesmo, dispónse por igual tempo a suspensión da actividade dos establecementos balnearios regulados na Lei 5/1995, do 7 de xuño, de regulación das augas minerais, termais, de manancial e dos establecementos balnearios da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a dos espazos termais e piscinas termais de uso lúdico, reguladas na Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia.

Décimo segundo. Suspéndese polo tempo previsto neste acordo a actividade dos albergues de peregrinos da rede pública da Xunta de Galicia.



Décimo terceiro. Durante o tempo previsto neste acordo, a cabida de edificios de culto, tanatorios ou calquera instalación asimilada quedará reducida a un terzo da súa capacidade máxima. Así mesmo, os cortexos fúnebres quedarán reducidos a un máximo de 25 persoas».

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 2020

Beatriz Cuiña Barja
Secretaria xeral técnica da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza

